DOS MINUTOS DE DOCTRINA

20 de octubre de 2015

EL TÚNEL

El título de una novela del escritor argentino Ernesto Sábato (1911-2011), llena de misterio, sirve para ilustrar la trama de este caso, donde se evidencia que hasta lo inexpugnable puede tener un punto débil.

Néstor, Pedro y Ricardo decidieron contratar una caja de seguridad en la sucursal de un banco cerca de su casa. Guardaron allí dinero en efectivo, joyas, monedas de oro, sumas recibidas desde Suiza en adelanto de una herencia, una señal recibida al firmar un compromiso de venta de una propiedad e, incluso, fondos de terceros. El “contrato de servicio de caja de seguridad” acaba de ser regulado en la Argentina en el nuevo Código Civil y Comercial que entró en vigencia el 1° de agosto pasado.

Si el propósito de celebrar un contrato semejante era el de poder estar a salvo de robos, hurtos, rapiñas y otros tipos de desapoderamientos involuntarios, ese propósito se vio frustrado cuando unos delincuentes excavaron un largo túnel desde un inmueble cercano, hicieron una brecha en los muros del banco y violentaron ciento treinta y seis cajas de seguridad. Entre ellas, la de Néstor, Pedro y Ricardo.

En la Argentina se denomina “boqueteros” a los ladrones que proceden de este modo. En otros países de lengua castellana se los conoce como “butroneros”. Igual que los

gusanos, horadan suelos, pisos, paredes y cuanto se les ponga por delante para llegar a su botín. Y en este caso, a estar a las declaraciones de las víctimas, el resultado fue suculento.

Demandado el banco, éste reconoció el robo, pero desconoció estar “jurídicamente constreñido a responder por las consecuencias”. Además, sostuvo que el hecho de que los demandantes hubieran depositado fondos de terceros en la caja equivalía a haber “transferido la locación”, lo que estaba prohibido bajo el contrato.

Pero el principal argumento del banco fue haber cumplido con todas las normas de seguridad que exige el Banco Central argentino, por lo que lo ocurrido era “una circunstancia de caso fortuito”. Y también alegó no existir prueba alguna de que en la caja de seguridad estuvieran depositados los bienes propios y ajenos que Néstor, Pedro y Ricardo dijeron que les habían sido robados.

En primer lugar, el juez consideró que el hecho de que las víctimas hubieran depositado fondos de terceros en su caja no implicó haber transferido el contrato a esos terceros. Hubo entre éstos y Néstor, Pedro

y Ricardo un contrato de depósito, lícito y válido, que autorizaba a los depositarios a conservar las cosas recibidas y, como en el caso, reclamar su devolución. Por otra parte, el contrato de las víctimas con el banco no exigía depositar sólo bienes personales.

El juez debió determinar si lo ocurrido constituyó un caso fortuito. Como se sabe, éste exime de responsabilidad a quien lo sufre. Para decidir, el juez recordó que bajo el contrato con el banco, el cliente paga por el uso y el servicio de custodia de la caja y aquél concede el uso de ese receptáculo, al que protege y custodia. Es un contrato que reúne características de la locación y del depósito.

El juez entendió que cumplir con las obligaciones de seguridad que impone el Banco Central *no eximía la responsabilidad del banco*. El magistrado llegó a esa conclusión porque, en su opinión, *el objeto del contrato era alejar o eludir, por más espectacular que fuera el robo, el peligro que implica la posibilidad de que ese hecho ocurra*. Para el juez, quien resguarda sus bienes en una caja de seguridad deja de hacerlo en su domicilio o en cualquier otro lugar, pues considera que las instalaciones del banco son lo suficientemente seguras como para evitar posibles siniestros.

“La obligación de custodia del banco es una obligación de resultado, de modo tal que ante el incumplimiento, el banco puede excusarse sólo si prueba la existencia de un supuesto de caso fortuito. Un robo, justamente, no constituye un caso fortuito, porque eso es lo que se ha querido evitar. Ese es el fin último del contrato”.

Si se interpretara el contrato de otra manera, dijo el juez, se lo privaría de sentido útil y se eximiría al banco de su

básica obligación de custodia de lo depositado. El hurto o el robo “son hechos previsibles” y la finalidad del contrato es, precisamente, proteger contra esos riesgos. En principio, “todo robo es evitable”, por lo que el banco respondería no sólo en el caso de que una caja fuera violentada (técnicamente, “robo”), sino también cuando fuere abierta sin violentar (“hurto”).

Además, el banco *responde por la idoneidad de la custodia de los locales y la integridad de las cajas, no sólo conforme con lo pactado sino de acuerdo con “las expectativas creadas en el usuario”*.

Este último punto merece especial reflexión: al considerar al cliente como un “usuario”, se coloca el debate en el terreno de los contratos de consumo, que, bajo el nuevo Código Civil y Comercial que entró en vigencia el pasado 1 de agosto de 2015, otorgan un elevado nivel de protección a “la parte débil” del contrato. Y al mencionarse *las expectativas creadas en el cliente*, el juez trasladó el juzgamiento de la responsabilidad del deudor al terreno de las obligaciones profesionales, “*donde la expectativa de un adecuado cumplimiento es naturalmente recibida*”.

Demostrada la responsabilidad del banco, quedó por resolver la cuestión de los daños sufridos por las víctimas de los hábiles boqueteros. El juez recordó que quien elige un sistema de privacidad absoluta como el que brinda una caja de seguridad, donde no se declara ni se constata el contenido, *debe asumir la dificultad probatoria*. Pero como la confidencialidad es una nota tipificante del contrato, *no se debe extremar la exigencia para demostrar el contenido de la caja, porque ello constituiría una carga imposible y afectaría la defensa en juicio*.

En el caso, el juez tuvo por probado, por medio de los testigos ofrecidos por las

víctimas, que éstas, pocos días antes, habían recibido fondos resultantes de la venta de un inmueble. La existencia de monedas de oro se justificó en la tradición judía de regalarlas para los cumpleaños, bar mitzvah, etc. Los registros de entradas y salidas de las víctimas llevados por el banco coincidieron con las fechas de la operación inmobiliaria, y las compras de monedas de oro se demostraron con los recibos pertinentes.

El juez tuvo también en cuenta la capacidad económica de las víctimas, sus viajes al extranjero y las transferencias bancarias recibidas para establecer la correspondencia de los fondos reclamados con lo que pudiera haberse efectivamente depositado en la caja. Aplicando una *estimación prudente*, el juez entendió que el producido de las compras de moneda extranjera efectuadas contemporáneamente con las entradas al banco había sido llevado al banco para su guarda.

Pero con respecto a las joyas y al adelanto de la herencia reclamados, el magistrado entendió que no se probó su existencia. Las fotos de las alhajas, por sí mismas, no fueron suficientes para ello. Y con respecto al adelanto de la herencia supuestamente recibido desde Suiza, el juez no encontró elemento alguno que probara el ingreso de esos fondos a la Argentina ni su derrotero.

El juez dejó en claro que si bien el nuevo Código Civil y Comercial permite establecer limitaciones a la responsabilidad de los bancos en estos casos, para que una limitación semejante sea operativa *debe existir una comunicación idónea al cliente informando su existencia*.

Amén de obligar al banco a reintegrar lo robado en la medida que se probó su existencia, el juez lo condenó por el daño moral sufrido por las víctimas, *pues el robo generó una alteración emocional*. No se trató “de un quebranto afectivo cualquiera” sino un daño a un interés espiritual objetivamente reconocible y jurídicamente valioso que altera el *modus vivendi* y genera preocupación con repercusiones espirituales negativas.

La sentencia es una de las primeras dictadas sobre este tema bajo el imperio del nuevo Código Civil y Comercial. Es importante notar que, no obstante la marcada protección que éste otorga a los consumidores, en tanto “parte débil” de los contratos, el juez no se apartó sustancialmente de los estándares probatorios habituales para otorgar “alegremente” otorgar una indemnización descabellada.

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**